

ha interpuesto directamente contra un particular del que exclusivamente se exige el cumplimiento de las obligaciones que entraña la escritura de 31 de Mayo de 1850, y obra á fojas 1 del cuaderno principal, del Juzgado primero de lo civil, en cuyo título funda el actor su acción hipotecaria; de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal y por los propios legales fundamentos en que se apoya su respectivo pedimento, se declara.

Primero: Que el Juez primero de lo civil de esta capital es competente para seguir conociendo del juicio hipotecario promovido por D. Cayetano Rubio, contra el Doctor D. José de la Sancha y Céspedes.

Segundo: Remítanse las actuaciones al mencionado Juez primero de lo civil, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; remítase copia igual al primero de Distrito; hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogasón.—M. Auza.—Ignacio Ramírez.—Simón Guzmán.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Noviembre de 1873.—*Emilio Ordaz*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por D. Eugenio Armendaiz, por sí y á nombre de su hermano D. Francisco Armendaiz, contra el cobro que les hace la Aduana Marítima de este puerto, del impuesto federal denominado derecho de bultos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Administrador de la aduana Marítima y Frontera

de este puerto detuvo, con su caracter oficial, al representante de la casa mercantil que tiene en esta plaza el C. Francisco Armendaiz, 75 barriles de harina, sustituidos despues con indianas, por cobrarle trecientos veinticuatro pesos siete centavos, por derechos de bultos sobre las mercancías importadas con el permiso número 7.

De este acto ha pedido amparo el apoderado y gerente de dicha casa: el Sr. Administrador rindió sobre él el informe con justificación que se le pidió, y esta promotoría va á evacuar el traslado prevenido por la ley, sobre ese recurso interpuesto.

Ha asentádose por el quejoso, que su acción la motiva aquel acto con el cual el C. Administrador ha violado los artículos 16 y 27 de la Constitución en la persona que representa, y ha asentado también que ha violádolos, por que no ha debido atacarlo su propiedad ni molestarle con exigirle el derecho de bultos á mercancías extranjeras que importó el 5 del próximo pasado mes, para el consumo de la Zona existente en esta frontera.

Hoy no se trata de si debió ó no cobrarse el derecho de bultos creado por la ley de 19 de Noviembre de 1867, á las mercancías extranjeras importadas por las aduanas de esta frontera, durante el régimen del arancel de 31 de Enero de 1856, por que lo exigido y dado se considera como un hecho ya consumado, que nadie promueve ni reclama; por que el comercio de ese entonces se prestó dócil sin discusión y sin protesta á satisfacerlo, cualquiera que fuese la razón que lo impulsara á cumplir la ley general explícita que lo imponía en sustitución del peage, y que al crearlo, el legislador no hizo distinción alguna de aduanas, ni excepción á las de la Zona: y por que cuanto ahora se dijera en cualquiera sentido, sería inoficioso y extemporáneo, sino que la cuestión de hoy que se agita es: si desde que comenzó á regir el nuevo arancel de 19 de Enero de 1872, debe seguirse cobrando ó no, á las importaciones, ese derecho de bultos.

La promotoría pasa á ocuparse de ella con la imparcialidad propia de su ministerio, y con entera sujecion á las disposiciones legislativas vigentes; y permítasele que desde luego y antes que lo abandone su memoria, emita la argumentación que de pronto le ocurre. El arancel de 1º de Enero de 1872, no puede regir y observarse separada ni resueltamente á la vez, por qué el uno niega lo que el otro afirma; por qué esta manda y expresa lo que aquel prohíbe y confunde; es así que el arancel es el que inconcusamente rige y se observa en todas las aduanas de la República, luego la citada ley no existe, y con ella ha espirado el cobro denominado derecho de bultos.

El Supremo Gobierno al promulgar el arancel que decretó en uso de las facultades que le había concedido la ley de 1º de Diciembre de 1871, espidió ese mismo día la circular relativa de 1º de Enero de 1872, en la que literalmente dijo: "dejarán por lo mismo de cobrarse separadamente, desde el 1º de Julio de 1872, los impuestos que siguen.... Derechos de un peso por bulto de ocho arrobas en sustitucion de peages."

El arancel vigente de ese día, mes y año espresados, en absoluta consonancia con dicha circular, no especificó derecho de bultos, ni otro alguno; sino que refundiéndolos todos, estableció: que se cobrara un solo derecho de importación, el consignado en el artículo 74.

Para el pago de los tributos y para la forma en que debe hacerse, la ley debe ser la norma y la garantía: sus palabras deben pesarse como diamantes para descubrir el verdadero sentido; y debe pretenderse que la ley se ejecute testualmente á la letra, por cuya escrupulosidad jurídica es muy digna de admiracion la Inglaterra. Pues bien: la ley del presupuesto de ingresos de la República para el año económico que comenzó el 1º de Julio de 1872 y terminó el 30 de Junio de este año, registrando parte por parte todo su artículo primero que contiene y especifica sus ingresos to-

dos, no numera los derechos de bultos, ni mas ingresos por derechos de importacion, que los del arancel de 1º de Enero de 1872. Y vease así mismo el artículo segundo y se leerá: "quedan refundidos en el derecho de importacion, *único*, que se cobrará en las aduanas máitimas, los impuestos siguientes, que establecieron la ordenanza de aduanas de 31 de Enero de 1856, y otras leyes.... Derecho de un peso por bulto de ocho arrobas en sustitucion de peages; nueve por ciento," y como esta ley es posterior á esa otra que estableció el derecho de bultos, y por ella no hay mas derecho de importacion que el del arancel vigente, facilmente se deduce, que no haciendo explicacion ni distincion alguna el legislador, al ocuparse del arancel y de la ley de 19 de Noviembre de 1867, ha por revocacion expresa ó tácita, derogado esta.

Ademas del artículo segundo de los transitorios del arancel, dijo: que quedaba reservado á una ley la determinacion de lo que debia regir respecto de importacion y consumo de mercancías extrajeras, en los lugares donde conforme á la ley de 30 de Julio de 1861, existe la Zona. Esa ley determinativa, no ha llegado á promulgarse, y la que estableció la Zona existente, agració por su artículo primero á los efectos extranjeros destinados al consumo de los lugares de la Zona, conque fuesen *libres de todos derechos*, y no pagaran mas que los *municipales*, Mas. El artículo 214, transitorio del reglamento de Aduanas Máitimas, fronterizas y de cabotaje de 1º de Enero de 1872, dijo: que mientras se expedía esa ley que habia de determinar la de importacion y consumo de efectos en la Zona, "se observará por las aduanas respectivas, lo determinado en la ley de 30 de Julio de 1861, y en el reglamento del contraresguardo en la Frontera del Norte, de 4 de Junio de 1870, con las adiciones y modificaciones que se le han hecho con posterioridad." Es decir, al reglamento segun debe entenderse por el pronombre puesto en singular, y por el tiempo

ya pasado ó pretérito de que se usa, pues no habla en plural, ni hace referencia al futuro, es decir, á las adiciones ó modificaciones que pudieran hacerse á la ley de la Zona, ó al mismo reglamento del contrabando del Norte.

Los telégramas de la aduana de 13 de Junio y de 3 de Setiembre de 1872, promovieron el cobro de un derecho no presupuesto y sí espresamente extinguido, como es el de bultos á los efectos extranjeros importados al país. Y el 24 de Setiembre del mismo mes, de 1862, y encontrándose el Supremo Gobierno con las facultades que le habian sido concedidas el 3 de Mayo anterior, resolvió á la aduana su duda ó pregunta, y le dijo terminantemente por telégrama de ese dia: que las mercancías extranjeras, "importadas con posterioridad, al 30 de Junio y que por lo mismo debían liquidarse con arreglo al nuevo arancel, se les exigiera solo el derecho Municipal, en el acto de la importacion, cobrando el resto de los derechos hasta la internacion, según lo dispuesto en el decreto de Zona Libre."

El 16 de Octubre del año próximo pasado terminaron las facultades concedidas al Gobierno Supremo; y sin embargo de que estan muy claros, esplicitos y especificados los ingresos del tesoro federal del año económico cuadragésimo octavo que acaba de terminar, la aduana siguió desde 13 de Noviembre por medio de telégramas, pretendiendo cobrar el derecho de bultos no presupuestado, hasta obligar al Sr. Ministro de Hacienda, á que por telégrama de 4 de Diciembre le contestara. "Dispone el C. Presidente, que se cumpla exactamente la resolución dictada el 24 de Setiembre, por no ser posible hacer otra cosa."

Siguieron despues las preguntas y resoluciones varias contenidas en los demas telégramas que corren agregados, y de los que hace mérito la aduana en sus informes; pero la promotoría no declina á ocuparse de ellos, sino que continua su camino de es-

tricto derecho y con entera sujecion á las disposiciones legislativas vigentes que ha citado; concluyesometiendo á la justificacion de V., la siguiente proposicion.—Única.—La Justicia de la Union ampara y protege al representante de la casa comercial de esta plaza, perteneciente al C. Francisco Armendaiz, contra el acto de Sr. encargado de la administracion Marítima y Fronteriza de este puerto, que al importar para la Zona las mercancías amparadas con el permiso número siete, le exigió el derecho de bultos, y le detuvo efectos para su pago. H. Matamoras, Julio 9 de 1873, á las once de la mañana.—Lic. Agustin Menchaca.

Sentencia del C. Juez de Distrito

H. Matamoras, Julio 22 de 1873.—Visto el presente juicio, en que el C. Español Eugenio Armendaiz, como personero y gerente de la firma "Francisco Armendaiz," pide amparo contra el acto del C. Administrador accidental de la Aduana marítima de este puerto, por que al *importar* el dia 5 de Junio último con el permiso respectivo los efectos extranjeros que lista á fojas una, le exigió el pago del *derecho* de bultos que el quejoso se niega á satisfacer, reputándolo ilegal, y para asegurarlo se le retuvieron unos barriles de harina contra su consentimiento. Visto lo espuesto por el Ministerio Público al evacuar el traslado que se le mandó correr: los informes rendidos por el funcionario de quien emanó el acto reclamado, con sus justificantes relativos: el escrito en que el C. Lic. Cristobal Montiel aparece con el caracter de apoderado sustituto del actor: el mandato con que lo acredita y su escrito de 16 del que cursa alegando de buena prueba. Considerando: que el Arancel vigente de Aduanas Marítimas y Fronterizas, publicado en 1º de Enero de 1872, previno en el segundo de sus artículos transitorios: que *Una ley, determinará lo que deba regir respecto de importacion y consumo de mercan-*

cias, en los lugares en que actualmente existe la zona libre, conforme á la ley de 31 de Julio de 1871.

Que el Reglamento del propio Arancel expedido en aquella misma fecha, repite en su artículo 214, único tambien transitorio, que *mientras se espere la ley que daba regir respecto de importacion y consumo de mercancías extranjeras, en los lugares en que actualmente existia la Zona libre, conforme al artículo segundo de los transitorios del Arancel, se observará por las Aduanas respectivas lo determinado en la ley de 30 de Julio de 1871, y en el Reglamento del Contrabando en la frontera del Norte, con las adiciones y modificaciones que se le han hecho con posteridad.*

Que estos textos confirman de una manera inequívoca y palmaria, que el legislador, al sancionar su novísimo arancel, espresamente dejó ileso los privilegios que por Decreto de 17 de Marzo de 1858, se concedieron al comercio de la Zona libre, y en consecuencia, que á él debe ajustarse en sus operaciones, y resolverse por él sus diferencias.

Que el hecho de que el actor se queja, está plena y legalmente justificado, en virtud de que la Aduana lo contiesa, espresando en sus citados informes de fojas nueve y veintiuna, que si le cobró á la casa Armendáiz el derecho de bultos, al *importar* sus efectos: que se lo cobró *por separado*, corroborándolo la liquidacion que exhibe y corre á fojas sesenta y una, y que por no pagarlo le retuvo cierta cantidad de harina.

Que si se examina el derecho con que la Administracion Marítima procede para hacer semejante cobro, resulta que no existe ley alguna vigente que lo apoye. Por que cobrándolo como derecho de *importacion*, quebranta el artículo primero del Decreto de Zona libre, que dice: "Los efectos extranjeros que se destinan al consumo de la Ciudad de Matamoros y los demás pueblos de las Orillas del Rio Bravo.....serán libres de todos derechos: con escepcion de los municipales"..... Porque exigiéndolo como derecho de

internacion, en la *importacion*, aunque para deducirlo cuando las mercancías se internen, que es lo que quiere practicar, viola el artículo sétimo del citado Decreto, cuyo tenor es la letra. "Al tiempo de salir los efectos extranjeros de los pueblos agraciados para internarse en la República, será cuando se causen los derechos que les están impuestos por los Aranceles" y no antes; á lo que hay que añadir lo que será objeto del noveno considerando.

-Por que no puede apoyarlo en el arancel de cincuenta y seis ni en el artículo segundo fraccion tercera del decreto de 19 de Noviembre de 1867 que estableció ese impuesto, en razon de que éstas leyes han de tenerse como no existentes, desde que empezó á regir la Aranceleria de 1º de Enero de 1872, en la cual quedaron aquellas *refundidas é incorporadas*, segun lo expresa la Circular de la misma fecha en las fracciones primera y quince de su párrafo cuarto.

Que tampoco cabe sostenerse ese cobro con el Arancel actual, porque ninguno de sus artículos lo autoriza, sino que con otros de los derechos que antes se cobraban *quedó en él de intento suprimido*, declarándolo así el párrafo once de la citada Circular, en estos términos, y dejarán por lo mismo de cobrarse separadamente desde el 1º de Julio de 1872 los impuestos que siguen;..... VI Derecho de un peso por bulto de ocho arrobas, en sustitucion de pago.

Que para sustraerse á las decisivas prescripciones de estas leyes, se apela á dos extremos insuficientes: el de suponer que la Zona libre está adicionada y modificada, fundándolo en la parte final del artículo 214 del reglamento trascrito en el segundo considerando; y el de obediencia que hay que prestar á las órdenes procedentes del Ministerio de Hacienda, que manda hacer efectivo el disputado cobro.

Que el primero de esos extremos es ineficaz por inexacto, ya porque la redaccion del artículo en que pretende basarse semejante interpretacion la rechaza, pues indica

que las adiciones y modificaciones de que trata, solo se refieren á la palabra "Reglamento;" como por que nunca han podido determinarse señaladamente esas modificaciones que se dicen hechas al decreto de Zona, y por que lo contrario se deduce del texto del artículo segundo transitorio antes citado, del último arancel.

Que tampoco es sostenible el segundo extremo, porque de los numerosos telegramas que el Ministerio transmitió á la Aduana, y está adjunta en copia, los de 24 de Setiembre y 4 de Diciembre de 1872 mandan: "que no se cobre el derecho de bultos, por ser incompatibles con el Decreto de Zona, y con el Arancel que rige;" y aunque los restantes todos previenen que se cobre ese impuesto, tal resolución no puede concertarse con las leyes existentes, ni tenerse como derogatoria de ellas, una vez que el Código civil prescribe en su artículo 8º, que "la ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior."

Que el artículo 28 de la de 20 de Enero de 1869, dispuso: que "los Tribunales..... tendran por regla suprema de conducta, la Constitucion federal y las leyes que de ella emanen"....., de cuyos precedentes resulta: que la Administracion marítima de este puerto retuvo las mencionadas mercancías del actor sin fundar la causa legal del procedimiento, contra la garantía que le otorga el artículo 16 de aquel Código; se declara de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal: que la Justicia de la Federacion ampara al C. español Francisco Armendaiz, contra el acto de haberlo retenido el C. Administrador accidental de la Aduana, unos barriles de harina, para seguridad del pago del derecho de bultos que le cobró separadamente, á la importacion de unos efectos extranjeros. Notifíquese; hágase publicar por los periódicos, y elévase con el expediente en revision. Así definitivamente juzgando y sentenciando, lo mandé yo, el Juez, y lo firmé con los de asistencia.

Doy fé.—Manuel Mendiola.—Fernando Mireles.—Jesus Cavazos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 27 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por Don Eugenio Armendaiz, por sí, y á nombre de su hermano Don Francisco Armendaiz, contra el cobro que le hace la Aduana Marítima de ese puerto, del impuesto federal denominado *derecho de bultos*, por las mercancías extranjeras que importó el día 5 de Junio último, reteniéndole para asegurar su pago, parte de los efectos importados, cuyo procedimiento viola en concepto del quejoso, las garantías que consigna la Constitucion federal en sus artículos 16 y 27, pues que ha quedado suprimido el referido impuesto, en todos los lugares comprendidos en la Zona libre, cual es Matamoros, en virtud de haber sido refundido en el derecho único de importacion, que establece el arancel de Aduanas Marítimas vigente, y del cual están declarados libres los efectos extranjeros que se introducen para el consumo de la expresada Zona, y considerando: Que el derecho de un peso por bulto de ocho arrobas, establecido en sustitucion del de peages, no fué suprimido por el mismo arancel de Aduanas, sino que simplemente ha quedado refundido, como otros varios impuestos, en el derecho único de importacion que estableció dicho arancel, y bajo esta misma forma sigue recaudándose por las oficinas federales en la generalidad de los puertos de la República. Que el referido derecho de bultos, que hasta ahora ha sido satisfecho por todas las mercancías que se introducen á los lugares que gozan del beneficio de la Zona libre sin reclamacion de ninguna especie, por parte de los importadores, debe seguir recandándose en

esos mismos puntos separadamente y según la manera que determina la ley de su creación, por no ser aplicables allí las reformas del arancel de 72, sobre refundición de los diversos derechos aduanales en una sola cuota. Que habiendo quedado subsistente el derecho de bultos, á pesar de las reformas introducidas por el mismo arancel, la Aduana de Matamoros no ha hecho más que cumplir con su deber al exigir su pago, y proceder al aseguramiento del interés fiscal, sin violar en nada las garantías constitucionales invocadas por el quejoso.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta; Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Matamoros, en 22 de Julio de este año, en que declaró: que la Justicia de la Federación ampara al C. español Francisco Armendaiz, contra el acto de haberle retenido el C. Administrador accidental de la Aduana, unos barriles de harina, para seguridad del pago de derecho de bultos, que le cobró separadamente á la importación de unos efectos extranjeros. Segundo: Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Don Eugenio Armendaiz, ni á su hermano Don Francisco, contra el acto que reclama por sí y en representación de este último, por no haberse violado con dicho acto las garantías constitucionales que invoca el quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Petro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—

TOMO V. PARTE II.

Luis Velasquez.—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 23 de Diciembre de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Aguascalientes, por José María Arellano, Pedro Contreras y Carlos Peña, quejándose de que se ha violado en sus personas, las garantías consignadas en el artículo 19 de la constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El que suscribe, en ejercicio de la Promotoría fiscal, por ministerio de la ley, ante V. respetuosamente manifiesta: que del escrito presentado en 27 del actual por los CC. José María Arellano, Pedro Contreras y Carlos Peña, aparece como causal del amparo que solicitan, la de que no se les hizo saber el auto motivado de prisión al cumplirse las setenta y dos horas que llevaban de reducidos á ella. Asientan los peticionarios, que á las once de la mañana del día 27 fueron consignados al juez 29 de letras, sin que se les notificara auto alguno; mas como por el informe que con fecha 28 rinde el C. Gefe político, se expresa que de Orden superior han sido llevados á la cárcel pública el día 24, por los delitos de riña, escándalo y faltas á la moral, no cabe duda que al consignarlos ha sido por la misma causa, lo que tuvo efecto en el término de las setenta y dos horas prevenidas, ó mejor dicho el 27 del corriente mes. No creo pues, haya infracción del artículo 19 de la carta fundamental, y por lo mismo, no creo tampoco sea aplicable á este respecto el artículo 69 de la ley de 20 de Ene-